

Cuando el feminismo tiene malos augurios

Sobre viejas y nuevas gestiones de la crisis o el retorno de las mujeres al hogar

Sandra Ezquerria

En uno de los debates celebrados durante las Jornadas Feministas Estatales en Granada a finales de 2009, muchas de las mujeres allí presentes nos interrogábamos sobre cómo íbamos a vernos afectadas por la crisis económica. Si bien hubo voces que sugerían que los sectores conservadores la aprovecharían para “mandarnos de nuevo a casa”, hacía poco que el Estado español se había visto azotado por la recesión y los diversos diagnósticos e hipótesis aún estaban en construcción: sólo nos quedaba esperar y observar la evolución de la situación económica, así como las respuestas de los gobiernos ante ésta.

Han pasado más de dos años desde aquellas jornadas y el panorama es cada vez más desalentador. Durante este tiempo hemos presenciado un doble proceso en la esfera de la política institucional que amenaza con socavar algunos de los avances más importantes en materia de igualdad de género realizados en época reciente. Por un lado hemos sido testigos de la cada vez menos disimulada adhesión a los axiomas de déficit cero y la restricción del gasto público social por parte de lo que un día fue la socialdemocracia. Por otro lado hemos asistido al ascenso por doquier de la derecha, la cual, además de enarbolar sin complejos la bandera del neoliberalismo, desempolva obcecada sus recetas de auxilio a la familia tradicional de los supuestamente virulentos *ataques* perpetrados sobre ésta durante los últimos años. Más allá de los impactos que estos dos procesos están teniendo sobre el conjunto de la ciudadanía, se destacan aquí sus efectos específicos sobre las mujeres y nuestros derechos sociales y laborales, así como sobre las libertades sexuales de todas las personas.

Cuando el PSOE se deshace de la igualdad

Cabe no perder de vista que en años recientes los ataques contra la igualdad de género han estado liderados, tanto directa como indirectamente, por el anterior gobierno del PSOE. La mayor parte de los 11.000 millones de euros inyectados durante el primer año de la crisis mediante el famoso Plan EEE se destinaron al sector de la construcción, el cual, en 2008, ocupaba al 16% de los hombres y únicamente al 1,9% de las mujeres. La financiación, además, no incluyó requisito alguno de presencia de mujeres en las contrataciones. Los recortes del gasto público social visibilizados en el famoso *tijeretazo* en mayo de 2010, y actualizados constantemente por las políticas de austeridad impues-

“Caracterizar la violencia machista como violencia ‘en el entorno familiar’ supone desandar mucho camino en el sentido de que fomenta su despolitización, su invisibilización...”

tas desde entonces, han tenido un gran impacto en las mujeres al estar nosotras concentradas en sectores públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Como consecuencia, somos nosotras las principales víctimas de la reducción de salarios y la eliminación de empleos públicos. Nuestra vulnerabilidad social y económica, a su vez, nos hace acusar con más fuerza la reducción de ayudas sociales y, ante la desaparición de éstas, somos nosotras las que mediante nuestro trabajo de cuidados no remunerado, las acabamos asumiendo.

La Reforma Laboral ha reforzado la dualización de género del mercado de trabajo asalariado y la Reforma de las Pensiones, así como el reforzamiento de su lógica contributiva, afectará previsiblemente de forma negativa a las mujeres ya que, a raíz de nuestra concentración en la economía informal, jornadas parciales y bajos salarios, así como de la frecuente interrupción de nuestra vida laboral para cuidar de hijos y otras familiares, encontraremos más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para acceder a una pensión de jubilación que pueda considerarse digna. La creciente austeridad resultante de la crisis de la deuda, cristalizada entre otras cuestiones en la constitucionalización del techo del déficit, ataca particularmente al estado de bienestar y los servicios públicos, y permite al Estado transferir sus obligaciones de protección social de nuevo a las familias. Y cuando decimos familias nos referimos, en la mayoría de los casos, a las mujeres.

Por otro lado, más allá de las fortunas públicas gastadas en las visitas de Ratzinger, máximo defensor de la *familia de verdad*, a Barcelona, Santiago y Madrid, tras el estallido de la crisis el gobierno del PSOE obsequió a las mujeres con la eliminación del *cheque bebé*, la supresión de la retroactividad en la otorgación de los beneficios de la Ley de Dependencia, la desaparición del Ministerio de Igualdad y, entre otras albricias como la postergación de la ampliación en los permisos de paternidad, el apoyo al bloqueo europeo a la mejora de los permisos de maternidad.

El gobierno de Zapatero, en definitiva, no sólo ha contribuido, bien por acción o por omisión, a que una parte importante de los efectos colaterales de la recesión recaigan de manera más o menos indirecta sobre las mujeres, sino que también, bajo el pretexto de la crisis, ha paralizó y eliminó activamente organismos, programas y políticas en pos de la igualdad de género. Ha sido incapaz, además, de abandonar su postura de subordinación y servilismo a una de las instituciones que mejor encarnan el heteropatriarcado a escala internacional: la Iglesia Católica.

Cuando CiU nos quiere mandar de nuevo a casa

Sin embargo, ni el gobierno de Zapatero en particular ni el social-liberalismo en general se han encontrado solos en esta contienda. Hace más de un año Artur Mas, candidato de *Convergencia i Unió* a las elecciones autonómicas al *Parlament*, se convertía en *Molt Honorable* catalán con un programa en el que las políticas de género brillaban por su ausencia. Palabras como *aborto*, *machismo*, *sexismo* o *feminismo* no aparecían en el texto, mientras que la expresión *violencia de género* lo hacía una sola vez y de forma absolutamente descontextualizada. El término *gay* se dejaba ver dos veces, una de ellas para garantizar el apoyo psicológico y emocional ante la existencia del hecho *gay* en la unidad familiar (sic), y la palabra *embarazadas* figuraba para promover la educación de las adolescentes en la maternidad (sic). En claro contraste, el término *austeridad* aparecía ocho veces, *religión* 36 y *familia* 84. Este baile de ausencias y presencias no era fortuito y en realidad anticipaba, por un lado, los profundos recortes sociales que actualmente está imponiendo el *Govern* de Mas y, por el otro, un regreso al pilar fundamental de la sociedad catalana: la familia. La de toda la vida. Dicho regreso pasa inevitablemente por una problematización de cualquier condición sexual “no normal” y un retroceso en la libertad de las mujeres y las personas para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Además, es precisamente la resurrección de la *santa familia* lo que posibilita a su vez que, en un contexto de recortes sociales sin precedentes, resulte posible la devolución por parte de la administración pública del cuidado de las y los más vulnerables al invisible *altruismo* de los hogares.

En Catalunya se empezaron a sufrir algunos cambios inquietantes poco después de las elecciones en noviembre del 2010: la reaparición de la “familia” en los títulos de los *Departaments* y otros organismos en substitución de “acción social” y “ciudadanía” mandaron un claro mensaje. A su vez, la dirección general de igualdad de oportunidades del extinguido *Departament de Treball*, al igual que el programa específico para la protección contra la violencia machista del *Departament d’Interior*, fue suprimida. Los conservadores catalanes no fueron una excepción y en 2011 la Ley de Familia de la *Xunta* gallega provocaba un claro retroceso para las mujeres al eliminar la distinción entre maternidad y sexualidad y recuperar la retórica de la familia heterosexual y la maternidad como rol social vital. El PP gallego también tuvo claro que una fórmula infalible para ahorrar en gasto social es restituir, tanto material como simbólicamente, las responsabilidades del cuidado a las mujeres.

Cuando el PP desea que nunca hubiéramos salido de ella

Pocos días después de acceder al gobierno del Estado español el Partido Popular anunció “el inicio del inicio” de su enigmática hoja de ruta para com-

batir la crisis. La primera legislatura de Mariano Rajoy se ha inaugurado con una batería de contundentes medidas contra la llamada crisis fiscal y la fetichizada rigidez del mercado laboral español. Una de las medidas estrella ha consistido en un recorte del gasto público valorado en 8.900 millones de euros y, entre muchas otras cuestiones, ha revertido en un nuevo retraso de la ampliación del permiso de paternidad de 15 a 30 días impuesta por la Unión Europea. El gobierno ha congelado además el calendario de implementación de la Ley de la Dependencia, lo que significa que aproximadamente unas 35.000 personas consideradas dependientes moderadas de nivel 2 no verán sus expedientes tramitados hasta el año 2013 y otras 220.000 dependientes moderadas de nivel 1 tendrán que esperar hasta 2014 para empezar a gestionar sus solicitudes de cuidado y atención. A los recortes de lo que algunos optimistas llamaron hace tiempo la cuarta pata del estado de bienestar se suman a su vez los impagos e intentos de privatización en los que numerosas comunidades autónomas y localidades gobernadas por el Partido Popular vienen incurriendo desde hace tiempo. Ejemplos de ello son las *Balears* de José Ramón Bauzá; el *País Valencià* de Alberto Fabra, donde sigue habiendo 31.000 valencianas y valencianos en lista de espera para recibir su ayuda; o Castilla-La Mancha, donde el gobierno de María Dolores de Cospedal adeudaba a finales del 2011 tres mensualidades a 30.000 personas en situación de autonomía restringida, y donde a 16.000 castellanas y castellanos que se les había reconocido el derecho a recibir la ayuda éste se les seguía negando. La ambigüedad de la ley ha facilitado además que, en otros lugares como la Comunidad de Madrid, Murcia y municipios andaluces gobernados por el Partido Popular, la evaluación y gestión de las ayudas haya pasado a manos privadas.

Cabe apuntar por otro lado que el gobierno ha anunciado el incremento de las pensiones. Si bien hay que saludar esta medida, cuando se la yuxtapone al reciente aumento de la carga del IRPF, las personas jubiladas también verán disminuir su nivel adquisitivo. En el caso de las personas viudas, el 93% de las cuales son mujeres, la perpetuación de su situación de pobreza será todavía más perceptible.

Los trabajadores y trabajadoras asalariadas en el sector público vuelven a sufrir un ataque a su poder adquisitivo y sus condiciones laborales como resultado de otras de las medidas: el gobierno de Rajoy ha congelado tanto sus salarios como la plantilla, ha ampliado su jornada laboral a 37,5 horas y, salvo algunas excepciones como las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, ha paralizado la reposición de bajas laborales. Todas estas disposiciones, junto con las expuestas anteriormente, constituyen otra dura embestida contra las dos principales dimensiones del sector público: el acceso y la calidad de los servicios a las personas usuarias por un lado y las condiciones laborales de las que los proporcionan por el otro. Estas medidas de los conservadores incrementan el peso desproporcionado, impuesto ya desde el gobierno

de Zapatero, de la crisis y su gestión sobre las mujeres y pretenden acelerar nuestro “retorno al hogar” como resultado de dos factores: en primer lugar, nuestra importante concentración en determinados sectores de la función pública y resultantes altas probabilidades de perder nuestro empleo y, en segundo lugar, la recarga efectuada sobre nuestro supuesto rol de cuidadoras profanas dispuestas a cuidar de todos, todas, todo lo que nos rodea y de herederas de las responsabilidades de cuidado que el Estado se sacude cada vez con más ahínco.

El paquete de medidas del Partido Popular contra la crisis no se acaba no obstante con los recortes sociales. En lo que se refiere al ámbito estrictamente laboral, Mariano Rajoy anunciaba justo antes de Noche Vieja la congelación del Salario Mínimo Interprofesional por primera vez desde su creación. Por otro lado, en el momento en que escribo estas líneas se está llevando a cabo de manera tremendamente opaca la gestación de una nueva reforma laboral dirigida a debilitar y fragmentar los convenios colectivos, congelar los salarios, simplificar los contratos, abaratar el despido y poner, quizás en un futuro no muy lejano, el punto de mira en la reducción de las prestaciones por desempleo. En unas negociaciones caracterizadas por una fingida indolencia del nuevo gobierno y el sometimiento de las direcciones de CC OO y UGT a las exigencias de la patronal, las élites políticas y económicas pretenden imponernos una nueva flexibilización del mercado laboral. Esta precarización afectará sin duda gravemente al conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, todo apunta a que, de nuevo, la vulnerabilidad que caracteriza la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo asalariado hará que la reforma laboral arremeta con más fuerza contra nuestras condiciones laborales e incluso nuestra capacidad de mantener nuestro empleo. No resulta anecdótico además que la patronal le haya arrancado a las cúpulas sindicales mayoritarias el fomento de las jornadas parciales, las cuales, junto con el resto de medidas mencionadas, tendrán un fuerte impacto, más allá de las condiciones laborales presentes, en futuros derechos sociales de desempleo y, entre otros, de jubilación. Si se tiene en cuenta además que las jornadas laborales parciales históricamente han sido el principal mecanismo mediante el cual se ha mantenido la segmentación de género del mercado laboral/¹, así como la intensificación de la doble presencia-ausencia de las mujeres como resultado de los cada vez más generalizados recortes sociales en los distintos niveles de la administración, es muy probable que el golpe que recibamos en este ámbito sea también más feroz.

Más allá de los recortes sociales y laborales anunciados, así como sus posibles impactos en nuestras vidas, el nuevo gobierno del Partido Popular también amenaza con mermar algunas de las victorias obtenidas por los feminis-

¹/ El 76% de este tipo de contratos se encuentran en la actualidad en manos de mujeres.

“Estamos ante una estrategia político-económica consciente de las clases dirigentes de re-privatización de la reproducción en aras de la supervivencia de la economía considerada ‘real’

mos durante los últimos años en otros ámbitos. Avances como la ley de violencia de género o la ley de igualdad, aunque parciales e insuficientes, han servido para visibilizar ante la opinión pública problemáticas tan importantes como el carácter estructural de las agresiones sufridas por miles de mujeres cada año o nuestra discriminación generalizada en el mercado laboral y otros ámbitos de la arena pública.

Mariano Rajoy ha puesto al frente de su política de Igualdad a dos personas, Blanca Hernández y Juan Manuel Moreno, con poca o nula experiencia en dicha área. Han pesado más de nuevo perfiles marcadamente técnicos con currículos deslumbrantes que una experiencia y conocimiento profundos que puedan garantizar un trabajo eficaz y convencido en torno a un fenómeno tan complejo como la opresión sistémica de género. Y hablando de las dificultades para abordar los efectos del patriarcado, no han sido pocas las voces que desde los feminismos se han alzado contra las declaraciones de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quién poco después de tomar posesión de su cargo se refería al asesinato de una mujer en manos de su pareja como caso de “violencia en el entorno familiar”. Tras el aparentemente inocuo desplazamiento discursivo del carácter público y estructural del “género” (que apela a las causas del fenómeno) hacia el talante privado y localizado del “entorno familiar” (el cual alude al lugar donde el fenómeno ocurre), se esconde en realidad un más que probable radical viraje político. Éste se basa en la negación de la necesidad de abordar de manera comprensiva y contundente una violencia cuyos efectos deberían ser de interés general, el origen de la cual yace en el régimen heteropatriarcal y que, aunque se manifiesta de manera frecuente en el marco de las relaciones privadas, en realidad se fabrica, difunde, perpetúa y exime cada día desde la totalidad de esferas políticas, económicas, mediáticas y culturales que conforman el conjunto del “ámbito público de lo social”. Caracterizar la violencia machista como violencia “en el entorno familiar” supone desandar mucho camino en el sentido de que fomenta su despolitización, su invisibilización y exonera, de esta manera, a los poderes públicos de atacar sus raíces en lugar de (algunos de) sus trágicos síntomas.

La *des-definición* ideológica de la violencia de género, no obstante, no es el único avance que el Partido Popular pretende arrebatarse a la lucha por la igualdad. La política de recortes sociales anunciada el año pasado por el gobierno autonómico de María Dolores de Cospedal, que incide en 9,8 millones de euros en la partida destinada al Instituto de la Mujer de la comunidad, ha acabado llegando también a la atención y acompañamiento a las mujeres

víctimas de violencia de género en forma del cierre de 85 centros de información, sensibilización y atención, 13 casas de acogida, así como otros servicios de urgencias especializados. Ello supone la pérdida de casi 500 empleos por un lado y de la atención a las víctimas existentes o en potencia, junto a sus hijas e hijos, por el otro. Ante las protestas de personas usuarias y trabajadoras la respuesta del gobierno ha sido que la atención a las víctimas se mantendrá aunque, según el portavoz conservador Leandro Esteban, “con bastante menos dinero público”. Tras su aparente ambigüedad se cierra el círculo de lo que podemos prever que será el impacto en la lucha contra la violencia machista de la generalización de presencia conservadora en los diferentes niveles de la administración: des-politización del fenómeno, disminución de recursos públicos para abordarlo y, como en otros ámbitos de los servicios sociales analizados anteriormente, privatización de su gestión.

Las políticas aprobadas, anunciadas o insinuadas por parte del nuevo partido en el gobierno, sin embargo, no constituyen en absoluto los únicos retos a los que tendrán que enfrentarse los feminismos y otros movimientos antipatriarcales en los próximos años. Antes de las elecciones del 20N Jorge Fernández Díaz, actual ministro de Interior, aseguró que, en caso de llegar al gobierno, el Partido Popular acometería una “reforma profunda” de la ley del aborto en la línea de recuperar e incluso restringir la regulación del año 1985. En claro contraste con la manifiesta asertividad del Ministro, en el programa electoral del PP el aborto únicamente aparecía mencionado una vez y sin referirse a ninguna medida más concreta que el “reforzamiento de la vida” o, en el apartado de la familia “una especial protección a los no nacidos”. Esta imprecisión programática, sin embargo, no debería confundirnos. Pareciera por un lado que la estrategia electoral de Mariano Rajoy pasó por concentrarse en rentabilizar la gestión de la crisis por parte del gobierno de Zapatero y, por el otro, que la política anti-elección de las mujeres del Partido Popular sigue su propia marcha tras el recurso del PP de la ley de 2009 ante el Tribunal Constitucional. Habrá que ver cómo avanza el recurso pero el nuevo gobierno no ha perdido mucho tiempo en anunciar, a través del flamante nuevo Ministro de Justicia, que su intención es volver a la condescendiente y criminalizadora ambigüedad de la regulación de 1985: deshacer los avances en igualdad no es incompatible con atacar la libertad de las mujeres a golpes de politización del poder judicial.

Y hablando del poder judicial: si bien la cuestión no aparecía el pasado mes de noviembre en su programa electoral, en 2005 el Partido Popular llevó al Constitucional también la ley de matrimonios homosexuales por su supuesta “desnaturalización de la institución constitucional del matrimonio” y, entre otras cuestiones, por atentar contra los intereses de los menores, cuyo “ámbito natural de filiación es la unión heterosexual”. Habrá que ver también en este caso como se pronuncia el Tribunal Constitucional, pero todo apunta a que la

aparente ambigüedad del partido de Mariano Rajoy en torno a estos temas ha respondido más a una estrategia electoral de uso exclusivo de la crisis como caballo de batalla que a un cambio de posición real. De manera similar al aborto, más allá de los debates que se puedan dar en el seno del partido entre los sectores más liberales y los más conservadores, el relativo silencio electoral del Partido Popular no responde tanto a una renuncia a arremeter contra los derechos de las mujeres y las libertades sexuales de todas las personas sino a un táctico aplazamiento.

De esta manera, la gestión de la crisis por parte del Partido Popular en los próximos años previsiblemente profundizará las medidas de austeridad lanzadas por el PSOE por un lado y fomentará la restitución del protagonismo social de la familia, por el otro, en un doble nivel: la familia como fuente de apoyo y cuidado (y en su seno las mujeres) es imprescindible para mitigar el desastre que la creciente evasión de responsabilidad social por parte del Estado como principal respuesta a la recesión alimenta. Esta familia, a su vez, no puede ser de cualquier tipo, sino que ha de ser la heterosexual acatadora y reproductora de la división sexual de toda la vida (del capitalismo). Así, la familia de algunos sectores del PSOE, de CIU, del PP y de la Iglesia Católica no sólo subvenciona mediante su altruismo a los Estados sino cada vez más también a un sistema económico que no deja de hacer aguas.

Pese a todo y a todos, no volveremos

El análisis presentado de las formas en que distintas opciones políticas han abordado, abordan y posiblemente abordarán la cuestión de la igualdad de género desde que estalló la crisis muestra, pese a algunas (salvables) diferencias, un claro hilo conductor. En primer lugar, se visibiliza que, a pesar de la ostentosa retórica de los grandes partidos, e incluso algunos avances prácticos como la primera legislatura “socialista” muestra, en tiempos de crisis, una vez se impone la lógica del recorte y adelgazamiento del gasto público, las iniciativas en pos de la igualdad de género resultan prescindibles y, como resultado, tanto si hablamos de Zapatero, como de Mas, Rajoy o Cospedal, son de las primeras en caer. El discurso oficial es que su caída es inevitable pero el subtexto no deja de ser que nunca fueron tomadas en serio.

En segundo lugar, si se tienen en cuenta las múltiples acciones de apoyo al sector financiero por parte de los grandes partidos se visibiliza de nuevo no solo la enorme responsabilidad que el rescate de los bancos del gobierno de Zapatero tuvo a la hora de fabricar la llamada crisis fiscal y de la deuda actual, sino también que el Partido Popular, tras anunciar recientemente favores fiscales al capital, avales multimillonarios para el sistema bancario y la creación del banco malo, escogerá descargar el precio de la crisis sobre las espaldas de las clases populares, y particularmente de las mujeres, y protegerá y premiará a los que en realidad la han creado. Pero eso no es todo. Los recortes y priva-

tizaciones de los servicios sociales públicos y los ataques a los derechos sociales y laborales por parte de los diferentes partidos en el poder, así como los impactos de todos ellos sobre las mujeres, no son meros efectos colaterales de la actual crisis sistémica y su gestión política, sino que constituyen una de las principales estrategias del sistema en su huida hacia adelante y garantizan a su vez su solvencia. En un proceso que autores como David Harvey han denominado “acumulación por desposesión”, los gobiernos y la Unión Europea imponen programas de recortes, austeridad y privatizaciones que tienen como principal objetivo el retorno al marco de los hogares (léase mujeres) de las responsabilidades de cuidado y reproducción asumidas en el pasado parcialmente por numerosos Estados, así como su externalización a los mercados. Dicho de otro modo, estamos ante una estrategia político-económica consciente de las clases dirigentes de re-privatización de la reproducción en aras de la supervivencia de la economía considerada real.

Si a todo ello le añadimos la resurrección ideológica por parte de la derecha, no sin cierta complicidad del social-liberalismo, de la familia tradicional como pilar fundamental en tiempos de crisis, así como sus implicaciones en la configuración de los roles de género, opciones vitales de las mujeres, libertades sexuales y modelos familiares, resulta que neoliberalismo y catolicismo retrógrado no son tan antagónicos como quizás algún día llegamos a pensar. Las mujeres sufrimos, y con el ascenso del Partido Popular al poder seguiremos sufriendo aún con mayor intensidad, las consecuencias de la imparable carrera de la clase política para agasajar a la jerarquía eclesiástica y los *mercados* mediante constantes concesiones materiales, políticas y simbólicas, y dicha carrera pasa, en definitiva, porque nosotras recojamos silenciosamente los pedazos desmoronados del Estado del bienestar.

Sin embargo, a pesar de lo que presagiaron aquellas voces en Granada, no volveremos a casa. Y no lo haremos no porque nos deje indiferentes todo lo que se está viniendo abajo sino para visibilizar que la responsabilidad de salvarlo no es nuestra. Nunca lo fue.

Sandra Ezquerro forma parte del Consejo Asesor de *VIENTO SUR*.